

AGENDA CIUDADANA

EL SECRETARIO Y LOS EXTRANJEROS

Lorenzo Meyer

No Pedirlo, Ganarlo.- Ningún gobierno logra el respeto del mundo externo pidiéndolo, sino que debe ganárselo con hechos. El mismo día que, en Iguala, el presidente Zedillo exigió a los extranjeros el respeto a las leyes y soberanía del país, en Madrid, los diputados españoles, por unanimidad, condenaron la matanza de Acteal, en Chiapas, y pidieron a su gobierno que “exhorte” al de México a investigar la actuación de los grupos paramilitares en esa región (**Reforma**, 25 de febrero). En este fin de milenio ya no se acepta que, con el manto de la soberanía y de la no intervención, se intenten cubrir las fallas en la defensa de los derechos humanos y, menos aún, los crímenes de Estado.

Un Extraño Enemigo.- A partir de la II Guerra Mundial y hasta no hace mucho, la élite política mexicana fue muy bien tratada por aquellos extranjeros que se encargaron de formar en sus países a la opinión pública en relación con México: funcionarios gubernamentales, empresarios, periodistas y académicos. Salvo excepciones, esos personajes lograron que se aceptara sin cuestionar la magnífica visión que los gobernantes mexicanos daban de si mismos, pero el caso extremo –el de Carlos Salinas-- fue también el último. El joven tecnócrata que probablemente no ganó la elección presidencial de 1988, apareció en los medios de información extranjeros como economista de gran calibre, imaginativo, patriota, honesto, democrático, revolucionario, solidario con los pobres, etcétera. El tardío descubrimiento de que Salinas no era lo que aparentaba, inició un período donde los defensores foráneos del régimen mexicano se mostraron más cautos y sus críticos más severos y

audaces. Evidentemente el cambio no ha gustado en los círculos mexicanos del poder. El seguimiento sistemático que se hace desde fuera a las acciones de los gobernantes de México, les irrita y, sobre todo, constituye un obstáculo formidable a cualquier intento de resolver el problema de la insurgencia de los indígenas chiapanecos por la vía de la fuerza. Quizá es por ello que hoy el gobierno ha desatado una ofensiva contra el escrutinio de los actores externos, pues busca recuperar la libertad de acción perdida – la que tuvo en Tlatelolco en el 68 o Guerrero en los años setenta, por ejemplo — y el terreno perdido en la batalla por la imagen internacional. En el México globalizado esa meta resulta difícil, por no decir imposible, si antes la realidad nacional misma no cambia.

La imagen externa del sistema político mexicano está dañada por la permanencia de un mismo partido en el poder por casi setenta años, por la creciente fuerza de los señores de la droga, por la incontrolable corrupción de la élite política, por los efectos de las crisis económicas recurrentes, producto de errores e irresponsabilidades del grupo dirigente como la de 1994-1995 y por la rebelión indígena de Chiapas y las masacres de Aguas Blancas y Acteal. A la clase gobernante mexicana le ha irritado, y mucho, la limitación que hoy le significa la presencia de extranjeros en una zona donde la descomposición del viejo sistema es más evidente: Chiapas. En respuesta y a falta de mejor opción y según palabras de un subsecretario de Gobernación, el gobierno ha decidido “vigilar a los extranjeros en Chiapas [pues ésto] forma parte de la nueva estrategia del gobierno para la solución del conflicto” (**Reforma**, 17 de febrero). Bajo el supuesto de que la mejor defensa es el ataque, la “nueva estrategia” busca echar sobre los observadores externos parte de la culpa de lo

que ocurre en Chiapas. Para ello, el poder usa a voceros oficiosos como son comentaristas de radio y televisión y legisladores afines, para acusar a los extranjeros y a informadores nacionales, como a Hermann Bellinghausen –el mejor cronista, sin duda, del drama chiapaneco-- por “hacer la apología de la presencia de extranjeros en el conflicto chiapaneco” (declaración del diputado panista Héctor Flavio Valdés García, *La Jornada*, 22 de febrero). Se trata de una cacería del “extraño enemigo”.

Nostalgia por el Anticomunismo.- Cuando el temor a la Unión Soviética –el “imperio del mal”— y el anticomunismo eran la actitud dominante en los países centrales, la salida fácil para el sistema político mexicano era echar mano del “extraño enemigo” para desacreditar a los opositores y desatar la violencia sobre quienes se atrevía a desafiarle.

Cuando el enfrentamiento entre el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y los estudiantes en 1968 culminó en la masacre del 2 de octubre, el mundo externo reaccionó muy tibiamente contra el crimen de Estado. Ni dijo ni hizo lo que si dijo e hizo veinte años más tarde, cuando el gobierno chino reprimió de igual manera y casi por igual motivo a sus estudiantes. Después del 2 de octubre de 1968 Avery Brundage y el Comité Olímpico Internacional que él presidía, aceptaron seguir adelante con los juegos –y apoyar la participación de Sudáfrica. Al *New York Times* no le mereció crítica alguna esa decisión y a lo más que llegó fue a mencionar el disgusto de un joven boxeador y estudiante de ciencias políticas de Sierra Leona (*The New York Times*, 4 de octubre de 1968). Se debe reconocer que esa prensa extranjera no se hizo eco de la teoría de la “conspiración comunista” difundida por el gobierno y los medios mexicanos y que reportó la muerte absurda a manos del ejército de jóvenes, mujeres y niños, pero

también se debe admitir que no reflejó mayor indignación ni condenó la violación de los derechos humanos de las víctimas (*The New York Times*, 3, 4 y 5 de octubre de 1968). Se limitó a señalar que la matanza había sido obra de un gobierno basado en un partido, el PRI, “afectado por la arteriosclerosis”, que había tenido el poder “demasiado tiempo” y que había actuado “con dureza y de manera innecesaria” contra los estudiantes (*Time*, 11 de octubre, 1968). Finalmente, *The New York Times* relegó a las cartas al editor el intento de valorar éticamente lo ocurrido en Tlatelolco; ahí, a un profesor norteamericano de origen mexicano, Ramón Eduardo Ruiz, se le permitió decir: “...el progreso industrial sin justicia social sólo agrava los problemas políticos...[el sistema político mexicano] no responde a las necesidades modernas de millones de personas deseosas de disfrutar los resultados del progreso” (4 de octubre de 1968). La dureza frente a los “extranjeros incómodos” hoy, no va a lograr el retorno de la indiferencia o tolerancia internacionales del 68; el mundo externo ha cambiado y el costo político por lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Chiapas no se puede diferir: se tiene que pagar completo y de inmediato.

Una Tesis sin Credibilidad.- El gobierno, apoyado por una parte de los medios de difusión –en particular Televisión Azteca--, por su partido y por una parte del PAN, se ha lanzado a contrarrestar el daño que le ha causado desde 1994 la presencia de los activistas en Chiapas y ya ha expulsado a varios: a Robert Schweitzer, por tomar fotografías hace 18 meses de una reunión entre miembros del EZLN y funcionarios del gobierno, a María Darlington porque el año pasado se unió a una marcha de simpatizantes zapatistas, y a Thomas Hansen, de “Pastores por la Paz”, detenido tras regalar una videogradora en una comunidad indígena. Las expulsiones no son

masivas, pero son una advertencia, como también lo son los citatorios entregados por el Instituto Nacional de Migración y los interrogatorios y revisión de papeles en calles y hoteles de San Cristóbal de las Casas.

El 17 de febrero, el secretario de Gobernación, leyó ante la prensa una declaración de ocho puntos en relación al problema de Chiapas, donde se resumía la posición del gobierno frente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Pero eso no fue todo, también señaló que si bien México es un país abierto frente al mundo, el gobierno está decidido a hacer cumplir la disposición constitucional que prohíbe a los extranjeros “inmiscuirse en los asuntos políticos del país”. Tras criticar la invitación que Manuel Álvarez de la Comisión Nacional de Intermediación había hecho a organizaciones extranjeras para observar lo que está ocurriendo en Chiapas --una “intervención en los asuntos internos de nuestro país”--, el encargado de la política interna volvió los ojos hacia la historia, y advirtió, severo y supuestamente alarmado, que: “Los mexicanos no podemos olvidar las lecciones de nuestra historia: las intervenciones extranjeras han sido trágicas para México”. Quizá el secretario sea un buen economista --esa es su profesión-- pero no es un buen estudioso de la historia. En ese campo, comparó peras con manzanas e incurrió en una exageración, en un alarmismo sin base. En efecto, sea cual fuere la opinión que cada uno tenga sobre el papel que los extranjeros están jugando hoy en Chiapas, no se le puede equiparar con las intervenciones “trágicas” que registra nuestra historia.

Las Tragedias.- Siguiendo la versión más o menos oficial de la historia mexicana, las tragedias o calamidades que han caído sobre México como producto de la intervención externa en los conflictos internos, son, en primer lugar, las acciones de

los ministros británico y norteamericano en apoyo de los diferentes grupos masónicos que agrupaban a parte de la élite política en los primeros años de vida independiente de la república. Más tarde, la acción militar de los franceses y otros europeos en apoyo al partido conservador y a su proyecto imperial en la segunda mitad del siglo XIX. Al despuntar el siglo XX y estallar la Revolución Mexicana, Estados Unidos --una potencia en ascenso y dominante en el Caribe y la América del Norte-- se propuso moldear el curso de los acontecimientos en su vecino del sur y beneficio propio; la conspiración del embajador norteamericano con los generales Victoriano Huerta y Félix Díaz para derrocar al presidente Madero, es el ejemplo más acabado de ese intervencionismo, y en esa categoría también deben de ponerse los intentos británicos, alemanes y españoles por apoyar entonces a la contrarrevolución. Ahora bien, si se adopta una perspectiva un tanto heterodoxa, a la lista anterior se le debe añadir el apoyo norteamericano a Benito Juárez para imponerse sobre los conservadores durante las guerras de Reforma o de intervención, así como las acciones del embajador Dwight Morrow en los años veinte de ese siglo para que Roma presionara a la iglesia católica mexicana para que abandonara el camino de las armas y aceptara un *modus vivendi* con la Revolución. Finalmente, en tiempos recientes, --de 1976 a la fecha-- Washington, directamente o por medio del Fondo Monetario Internacional, ha intervenido una y otra vez en favor de los gobiernos mexicanos, incluido el de Ernesto Zedillo, para evitar que sus malos manejos y errores económicos les costara el tener que dejar el poder.

Todos los casos señalados, y otros más que se pueden añadir --por ejemplo, las acciones de la CIA de las que habla Raymundo Rivapalacio, por ejemplo (*El*

Financiero, 23 de febrero)--, son acciones de gobiernos con el objetivo de servir a los intereses de su Estado. Hay, por lo tanto, una enorme distancia entre esas intervenciones “trágicas”, y las de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos o las de simples particulares que consideran que la violación y los ataques a la dignidad humana son asuntos que atañen a cualquiera, independientemente de su nacionalidad.

La raíz y razón del levantamiento de los neozapatistas chiapanecos son fundamentalmente nacionales, y nacionales son también los caminos de su solución. Pero resulta que hoy no cualquier solución es admisible. La soberanía del gobierno mexicano --soberanía relativa por estar condicionada por sus compromisos económicos y políticos con el exterior-- no le da derecho a intentar una solución de fuerza, sea directa como en el 68 o solapada como Acteal. La sospecha internacional de que el gobierno mexicano puede en cualquier momento caer en la tentación de la “solución Final” a su problema en el sureste mexicano --sospecha basada en su récord histórico --, es lo que hace que el mundo externo busque estar presente en Chiapas y, con esta presencia, evitar una tragedia mayor de la que ya ha tenido lugar.

En suma, la soberanía, el prestigio y el respeto del extranjero no se ganan y defienden con declaraciones tronantes y deportaciones de activistas en pro de los derechos humanos, sino con acciones que hagan de un gobierno un objeto de respeto y apoyo de su propia sociedad. Eso lo sabe bien una clase política educada en el exterior, entonces ¿a que viene este brote de xenofobia?

Nota: esta columna no aparecerá la próxima semana.